

# LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACIÓN

GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ

*Rector Magnífico de la Universidad Carlos III de Madrid  
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de  
Madrid*

## INTRODUCCIÓN

Siempre he pensado que la incorporación del derecho y de los derechos humanos en la educación es una cuestión vital para cualquier sociedad democrática. Por ello, para defender una “*España civil*” abogaré por la importancia de una asignatura de *ética pública y Derecho*. Posteriormente, argumentaré sobre los *valores de la ética pública en los objetivos de la enseñanza*, para luego profundizar en *la educación en valores para todos*. Finalmente, defenderé la posición de *la educación laica y de una sociedad abierta* y analizaré, para concluir, *la relación entre Iglesia y educación*.

## POR UNA ASIGNATURA DE “ÉTICA PÚBLICA Y DERECHO”

Cada vez que se produce un acontecimiento criticable o rechazable, sobre todo si se reitera en el tiempo y se producen daños graves a la convivencia e incluso daños personales, hasta muertes, surgen voces que reclaman en la educación, en todos los niveles, la presencia de acciones y de enseñanzas que propicien el conocimiento de valores y de principios que puedan servir de antídoto a esas situaciones. Cada semana, después de la estadística de accidentes en carretera, encontramos opiniones que reclaman para acabar

con esa plaga una adecuada educación para la circulación. Lo mismo ocurre cuando un acontecimiento luctuoso se produce en una escuela o en un instituto, consecuencia del acoso o de la violencia que unos sufren y que otros infligen, cuando la llamada violencia de género se cobra una nueva víctima, o cuando un grupo de emigrantes es apaleado por unos salvajes ignorantes, que creen que la violencia soluciona problemas. Con estos hechos o con otros parecidos se propugna una respuesta, por supuesto policial y judicial, pero sobre todo educativa. En este campo se reclama una asignatura que forme en la importancia de la seguridad vial, que esté atenta sobre la violencia en general y sobre la violencia de género en particular, y que señale los antídotos, como el respeto, la igualdad y la tolerancia.

Todas estas reclamaciones son el signo de un problema serio, pero no suponen un diagnóstico adecuado, puesto que se limitan a aspectos concretos sin abordarlo en su plenitud, con todos sus perfiles y con todos sus matices. Los brotes de especial virulencia que producen esos fenómenos preocupantes de falta de civismo, de violencia y de muerte, son sólo la punta de un iceberg que abarca a todas las dimensiones que afectan a lo que llamarían una *pedagogía de la libertad*. El Derecho es un medio de socialización o deseudoculturización fuerte, basado en el consenso y en la coercibilidad a través de las sanciones y penas que puede imponer, pero su utilización exclusiva, sin otras medidas más profundas, es incapaz cuando falla el consenso y sólo queda el uso de la fuerza. El consenso sólo puede ser fruto del convencimiento, de la adhesión razonable a los valores principales del sistema, desde la idea de dignidad humana hasta las de libertad, igualdad y solidaridad y sus concreciones, como la tolerancia, el rechazo de la violencia y la defensa de la solución pacífica de los conflictos. En la formación recta de las conciencias, que es condición de la comprensión sobre el valor de la obediencia al derecho en las sociedades bien ordenadas, la educación es un instrumento indispensable. Sólo la convicción razonable y libremente entendida y aceptada que procede de una formación pensada, estable y sistemática. Por ello, necesitamos una asignatura sobre la educación en valores que no puede ser improvisada, ni coyuntural, ni oportunista, sino sistemática, completa y adecuada a la edad de los alumnos y que exige una estabilidad y una permanencia para que pueda producir frutos.

Con su implantación se deben despejar algunos prejuicios. Los más mayores tendremos que descartar cualquier comparación con el adoctrinamiento que suponía la llamada formación del espíritu nacional, un patético intento de intoxicación con los “ideales” del franquismo, del falangismo y del nacional-sindicalismo. También se debe rechazar cualquier paralelismo o cualquier comparación con la enseñanza de la religión. No es una asignatura para los que no hagan religión, sino general y para todos los estudiantes, como *una pedagogía de la convivencia y de la libertad*. El peligro del agustinismo político es que se mantenga la idea de que los creyentes no necesitan del derecho, que debería ser sólo para los pecadores, y la tentación de hacerlo como alternativa a la religión.

Superadas esas dificultades, el Estado debe tomarse en serio la asignatura y debe darle un status de materia principal, evaluable y explicada por profesores solventes y competentes, como un cuerpo estable y en plena dedicación reclutado entre licenciados universitarios, especialmente juristas, pero también politólogos, historiadores, filósofos o sociólogos, que dominen unos programas exigentes, externos y profundos, a partir de los cuales se programen las enseñanzas de ética pública y de derecho, necesarias para una sociedad democrática. Sin descartar que pueda existir en la enseñanza secundaria una enseñanza inicial adecuada a la edad y que sirva como introducción a la que de manera principal se debe impartir en el segundo curso de bachillerato.

Sólo si existe voluntad de implantar esos “rudimentos de ética y derecho”, como se llamaba la asignatura a principios del siglo XX, esta operación producirá resultados y servirá para orientar adecuadamente a los alumnos sobre las reglas de la convivencia y sobre el funcionamiento de una sociedad democrática y de su derecho. Si el Gobierno se decide a realizar esa reforma, se habrá producido un cambio revolucionario en la enseñanza preuniversitaria y se producirán, sin duda, resultados positivos para la convivencia, con un modelo de ciudadanía que respetaría al otro como tal otro e igual en dignidad y en derechos.

Ahora sólo reciben esa formación en la Universidad los estudiantes de Derecho, de Ciencias Políticas y en algún caso de Humanidades; con la reforma sería una enseñanza generalizada y universal, e impartida por profesores especialmente preparados. Sería

hacer el trabajo a medias si se implantase la asignatura y se atribuyese su docencia a profesores ya existentes, como los de Filosofía e Historia. Éstos deberían tener acceso al nuevo profesorado, como los juristas y los politólogos, pero a todos se les debe exigir una formación especializada y propia para impartir la asignatura, que se podría llamar “Ética pública y Derecho”. No se trata de hacer desde estas líneas el programa de dichas enseñanzas: para eso existen en la Universidad española centros especializados y deseosos de colaborar en la mejor preparación de esa asignatura.

Se puede, sin embargo, adelantar que una primera parte debe cubrir los principales aspectos de la ética pública desde su raíz moral última, que es la idea de dignidad humana. Su desarrollo son los valores superiores de libertad, de igualdad, de solidaridad o de seguridad. El paso de la ética pública al derecho, con la mediación del poder político, llevará al estudio de las relaciones entre ética, poder y derecho en el mundo moderno. Los principios jurídicos, los derechos fundamentales y los procedimientos, las reglas de juego que marcan los comportamientos posibles, completan el programa, que puede cerrarse con un análisis de los conceptos jurídicos fundamentales.

Esta propuesta de programa u otra que permita la visibilidad del complejo instrumento que es el derecho en las sociedades democráticas, tan asociado con la ética y con el poder, pueden ser el punto de partida de un cambio revolucionario en la enseñanza en España.

De esas enseñanzas los estudiantes de bachillerato comprenderán lo importante que es el respeto, además de a los demás, al medio ambiente, a la fauna y a la flora. Comprenderán que todas las ideas son libres y que nadie debe interferirlas ni violentarlas. La Constitución permite que incluso las ideas que vayan contra los ideales más profundos de nuestra convivencia puedan ser defendidas si no producen un claro y presente peligro de propugnar la violencia para su consecución. Sabrán los estudiantes que deben desterrar cualquier tentación de violencia, que se debe obedecer a las leyes y respetar a las autoridades legítimamente derivadas del sufragio universal, sin perjuicio del derecho de todos a criticar o protestar y a recurrir ante los tribunales los actos políticos y administrativos que lo merezcan. Deben saber, sobre todo, que la libertad, como decía Montesquieu, consiste en hacer lo que las leyes permiten, porque si se pudiera

hacer lo que prohíben todos tendrían ese poder y ya no habría libertad.

Defender el derecho en la sociedad democrática como el mejor cauce, junto con la educación, para una convivencia ordenada, no debe suponer crear ciudadanos sumisos. Se debe impulsar la libertad crítica, la independencia y la autonomía de todos para rechazar a gobernantes corruptos, autoritarios o falaces, y para desterrar la manipulación y la mentira de la vida pública. Es una asignatura, en fin, capaz de formar a ciudadanos libres e iguales en derechos.

## LOS VALORES DE LA ÉTICA PÚBLICA EN LOS OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA

La Constitución de 1978 parte del espíritu de la modernidad, del hombre centro del mundo y centrado en el mundo. También en lo que se refiere a la enseñanza la idea de dignidad humana es punto de partida y objetivo al mismo tiempo. Así se expresa en el artículo 27.2 de la Constitución: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Para nuestro país, éste es el ideario de la enseñanza pública, y también de toda la enseñanza privada y religiosa que reconoce la Constitución, aunque esta última puede tener además carácter propio o ideario particular, que coincide con los fines y los objetivos de sus fundadores. De hecho, es una realidad constatable que ante los dos idearios concurrentes la enseñanza privada opta por desarrollar el propio y dejar en segundo lugar el general, que es sin embargo obligatorio para todos. Un ejemplo frecuente sirve para ilustrar el tema: me refiero a la separación de sexos impuesta en muchos colegios católicos, especialmente vinculados al Opus Dei o a otras organizaciones similares. En esos casos se rompe el principio de no discriminación, y se frustra con ello un objetivo central de nuestra sociedad democrática, la educación en igualdad. Lo mismo podemos decir de mensajes vinculados a posiciones de la Iglesia católica con relación a los anticonceptivos, los homosexuales, el divorcio o el aborto, que se debe divulgar desde los centros de esa confesión y que en algunos casos contradicen principios constitucionales, como la no discriminación o la libertad ideológica o de conciencia.

En todo caso, los idearios parciales no ayudan a hacer ciudadanos, sino creyentes, en muchos casos con un germen ideológico contradictorio con los principios educativos generales marcados en la Constitución.

Aparece así clara la necesidad de una enseñanza pública que informe y forme en las ciencias, en las técnicas y en las artes, y prepare para la profesión a los jóvenes en todos los niveles, incluido el universitario, con lo que se marca un *cursus honorum* igualitario donde el mérito y la capacidad son los criterios de la selección. Y no se pueden alegar las injusticias ni las violaciones del principio para desacreditarle y para justificar favoritismos o presiones. Las patologías ponen de relieve la dimensión desfalleciente de la condición humana, pero no son argumentos racionales para descartar la pretensión de objetividad y de igualdad en la instrucción de todas las personas. La educación, facilitando la formación y la información, esclareciendo nuestro juicio, nos prepara para participar y para competir, con esfuerzo y sacrificio, pero con garantías de éxito. Es una forma central de socialización, es decir, de inserción de la persona en los valores y en la cultura de una determinada sociedad, dotándola de una preparación adecuada para servir a la sociedad y para realizarse en su profesión.

Pero el ideario constitucional sitúa ese desarrollo "... en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Así, la enseñanza pública tiene, junto a su misión en la formación de cada persona, de su razón y de su sensibilidad, una misión complementaria, pero no menos importante de inserción de la persona en la sociedad y en las instituciones políticas. Como dijo León Gambetta en abril de 1881, en el *Congreso de la Liga de la Enseñanza*: "... desde el momento en que queráis instruir respecto al sufragio universal y que queráis hacer electores inteligentes y libres, será necesario proporcionar una educación positiva; es decir, una educación que excluya la quimera, lo absoluto y el sofisma". Por eso, se dirá, la instrucción en el primer sentido impulsa las luces, y en su segunda acepción, las virtudes cívicas que acompañan a la formación del ciudadano. Es la pedagogía de la libertad de la que hablaba Maritain, que nos enseña a convivir con los demás y a ser ciudadanos, a decidir por nosotros mismos desde la igualdad política. La amistad cívica, la fraternidad, el compromi-

so, la comprensión, el rechazo de los dogmas, la creación de espacios de tolerancia, son tareas que fortalecen y hacen posibles otras formas de sociabilidad. Se trata de educar integralmente para la convivencia, de ejercer la inteligencia crítica, incitar a la reflexión, preguntarse por la razón de las cosas, despertar la curiosidad y el sentido de la observación. Toda la tradición del republicanismo, desde Montaigne a los ilustrados como Rousseau, Jovellanos o Condorcet, o lo que supone en Francia la *Liga de la Educación* con Jules Ferry o Gambetta, o los autores de la *Institución Libre de Enseñanza*, participan de esos criterios y de esos valores que defienden una educación integral que considere la instrucción y la formación individual y la colectiva de formación del espíritu cívico. Profesionales y ciudadanos libres son el objetivo, el ideario de la enseñanza pública, en definitiva, la realización de la dignidad humana en sus dos vertientes, la privada y la pública.

Me temo que los idearios de los centros privados no tengan esa visión total de la ciudadanía, de bien común y de interés general, sino que más bien favorezcan la fragmentación y la mentalidad de sociedad privada. La formación de catecismo con creyentes que parten de una fe o que aceptan los dogmas de una Iglesia o de una corriente filosófica puede proporcionar profesionales competentes, pero no son buena base para la preparación de ciudadanos inteligentes y libres. Si nuestra dignidad supone autodeterminación individual, decidir por nosotros mismos, tampoco la encontramos fácilmente en una enseñanza que parte de conceptos previos. Así, no hay sitio para despertar la curiosidad, ni para suscitar el espíritu crítico: sólo hay sitio para la competencia y la lucha por la promoción. La idea de igualdad tiene difícil encaje en idearios que parten de la pertenencia a un fragmento social que no tiene una visión de totalidad secular, y que no transmite entre sus ideales el de la amistad cívica. Sin embargo, ésta representa el lazo social más profundo entre los ciudadanos, integrando lo individual y lo colectivo, la esfera pública y la privada. Para que una comunidad tenga conciencia de sí misma es necesario que los ciudadanos, desde la escuela primaria, reciban la idea de *philia* como inseparable de su personalidad social, que les haga similares e iguales. Rompe los esquemas corporativos y las jerarquías sociales y prepara a la sociedad para una convivencia democrática. Solamente la enseñanza pública pro-

porciona esos instrumentos intelectuales que ayudan a impedir la dialéctica del odio y del amigo-enemigo, solamente desde ella se puede superar el patriotismo comunitario, desde la realidad natural, nacional o lingüística para alcanzar la racionalidad del patriotismo constitucional. Feijoo, en el *Teatro Crítico Universal*, será un precursor de esa idea: la formación, desde la escuela, de mentalidades que basasen la comunidad política sobre un tipo de amor "... que, lejos de fundamentarse en el hecho de haber nacido en un determinado territorio, fuera resultado de la decisión siempre voluntaria de componer una sociedad común, bajo un gobierno civil y la coyunda de unas mismas leyes...". Para Feijoo será el camino para luchar contra los nacionalismos, tanto en contra de la pasión nacional como "... contra el desordenado afecto que no es relativo al todo de la república, sino al propio y particular...". España es un Estado compuesto que debe tener en cuenta las dos dimensiones de la existencia de tanto la *communis patria* como las *propriae patriae*. Pero vemos excesos, porque una escuela sólo tiene en cuenta las *propriae patriae*, y otra, sólo la *communis patria*.

Como en todo, el equilibrio y la moderación, pero con el reconocimiento del papel central de la enseñanza pública, son imprescindibles en este tema. Frente a la escuela privada y a los excesos de una autonomía excluyente de lo común, la enseñanza pública, que es también la de las autonomías, debe cumplir con su deber de crear en los espíritus el espacio común que hace vivible a la democracia. Todos los Gobiernos autonómicos con competencia en materia de educación deben cuidar de esa competencia vital para la formación, así como evitar desviaciones exclusivistas y negadoras de la *communis patria*, y el Gobierno central debe vigilar, inspeccionar y homologar el sistema educativo para que la enseñanza pública pueda cumplir ese papel fundamental. La *communis patria* no es la de la comunidad natural ni la de la Historia, ni la de los sentimientos comunes, sino la de las comunes leyes, la soberanía popular y la ética pública democrática, la que la escuela pública transmite, referente central de la racionalidad y del patriotismo constitucional, que es el único patriotismo aceptable a la altura del siglo XXI.



## LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA TODOS

Por estas razones, son rechazables las propuestas –apoyadas desde la Iglesia Católica– que buscan establecer paralelamente una enseñanza de la religión católica para los creyentes y otra de valores constitucionales para los no creyentes, ambas evaluables. Este tipo de propuestas recuerdan a la doctrina de los dos reinos del agustinismo político o de una visión que en la tradición española, desde los Reyes Católicos, acostumbra a vincular la unidad del Estado con la unidad de la fe, y que considera, todavía hoy, que hay una verdad sobre el bien y el mal que debe sobreponerse a los que afirman que “la voluntad popular es la fuente primaria y única del derecho”, como afirman los señores obispos en el documento de la Conferencia Episcopal de 1996, *Moral y sociedad democrática*.

En realidad este tipo de propuestas sería imposible que se plan-teasen en otros países de la Unión Europea y en el entorno de nuestra cultura política y jurídica. Ni en Estados Unidos, país de fundamentos religiosos, pero con una tajante separación entre las iglesias y el Estado, ni en Inglaterra, que aún tiene religión oficial y a la reina como cabeza de su Iglesia, se pueden encontrar regulaciones que ni siquiera se aproximen a esta que ahora se propugna. Como dice el profesor Celador, uno de los principales especialistas en el tema, la enseñanza de la religión en Inglaterra se vincula al derecho de los padres a elegir la educación que quieren dar a sus hijos mediante dos mecanismos autónomos: la enseñanza religiosa como hecho cultural o como hecho confesional. En un caso, se trata de enseñar y de aprender, y en el otro, de adoctrinar. En los centros de titularidad estatal sólo se enseña la religión como hecho cultural, de manera voluntaria y desde la libertad de cátedra, ajena a los principios confesionales de cualquier religión, y sólo para contribuir a la formación de unos alumnos a los que se respeta la libertad de conciencia. En los centros de titularidad religiosa se ofrece además enseñanza religiosa como hecho confesional, pero no se trata de enseñanzas alternativas, y se puede en esas escuelas solicitar la exención de ambas, sin que tengan evaluación en el currículum del alumno ni que esta posición pueda suponer desventaja o trato discriminatorio.

Si se compara este sistema de un Estado aún confesional con el de un Estado laico, que carece de religión oficial y donde ninguna

confesión tiene carácter estatal, como España, parece aún más impresionante la desmesura del proyecto que comentamos.

Es la vieja doctrina agustiniana, luego adoptada por Lutero, de los dos reinos: el de los creyentes y el de los santos, que reciben la buena doctrina, que son adoctrinados en la verdad y en el bien por encima de coyunturales mayorías, y el de los pecadores, sometidos al rigor del derecho y que tienen que conocer el sistema jurídico de su país, que les es aplicable, y, por consiguiente, los valores constitucionales. Son alternativos y transmiten el mensaje a los jóvenes en formación de que conociendo la “verdad que nos hará libres”, la verdad religiosa administrada por la Iglesia católica española, no tienen necesidad de conocer nuestra Constitución. Es la inocencia histórica de la Iglesia, por encima de las temporales regulaciones jurídicas, que es transmitida como doctrina a los jóvenes desde una aproximación canónica y dogmática que no va a favorecer el pluralismo ni la tolerancia, ni va a entender la neutralidad del Estado. Es el reino de los justos que se rige por la ética privada de la Iglesia y que no necesita de la ética pública recogida en la Constitución. Junto a ellos, en los mismos bancos, los pecadores e hijos de padres pecadores que reciben la doctrina de la espada, que son los valores constitucionales laicos y que nunca podrán saber que “la verdad” es la que les hace libres.

Esta gran falacia desde una argumentación de principios, con la intransigencia dogmática de las cuestiones de principios, sólo pretende asegurar y afiliar creyentes. Como dice Bobbio, este talante “no eleva los intereses, sino que degrada los principios... Discuten los principios, pero trabajan por los intereses...”. En eso consiste el adoctrinamiento, frente a la enseñanza libre y respetuosa que deriva de los valores constitucionales. En realidad, todos los jóvenes deben recibir esa enseñanza constitucional que expresa el contenido del artículo 27.2 y que como ya hemos recordado establece que la finalidad de la educación es “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Dentro de esos principios está el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Es una parte del todo que es el desarrollo de la personalidad, y no se ciñe a la religión católica, sino a cualquier religión, y también a las posturas morales de los no creyentes.

Así, los alumnos que reciben esos valores constitucionales pueden saber que “la libertad nos hará más verdaderos” y que entre las dimensiones de esa libertad está buscar la verdad religiosa desde el pluralismo y la libertad de conciencia. En cambio, los niños que reciban el mensaje de la doctrina católica “la verdad os hará libres”, cuando lo extiendan desde la búsqueda del bien y de la salvación a la realidad social y política incurrirán en ese talante que en nuestra historia caracterizó a la Iglesia oficial, de exclusión y de discriminación de los heterodoxos. Cuando se adoctrine sobre la maldad de la despenalización de las interrupciones del embarazo, y se emocione y se horrorice a los alumnos educándoles con esos vídeos que muestran operaciones de aborto, desde una transmisión emotiva, para orientar comportamientos, cómo se va a hacer compatible esa perspectiva con la sentencia del Tribunal Constitucional que argumenta la constitucionalidad de esa despenalización y la declaración conforme a derecho.

Es una solución absurda y claramente inconstitucional esa resurrección de san Agustín y de Lutero, y de la doctrina de los dos reinos, que priva a la mitad de los niños y niñas de la enseñanza de los valores constitucionales, que crea una escisión y que reabre de nuevo el siniestro mensaje de las dos *Españas*.

Quizá sea, en cambio, el momento de cuestionar, por fin, la propia constitucionalidad de los acuerdos con la Santa Sede, y en relación con el que nos ocupa sobre enseñanza y asuntos culturales, que entró en vigor el 4 de diciembre de 1979, antes que la Constitución de 29 de diciembre. En efecto, la afirmación del artículo 2 de que la enseñanza de la religión sea en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales parece difícil de casar con la aconfesionalidad del Estado, con la libertad religiosa, que impide su carácter obligatorio para todos los alumnos como esas disciplinas fundamentales. También es difícil de asumir lo establecido en el artículo 5, que regula la garantía del Estado para que la Iglesia organice cursos voluntarios y otras actividades religiosas en los centros universitarios públicos, que podría ser contrario a la autonomía de las universidades establecida en el artículo 27.10 de la Constitución.

## EDUCACIÓN LAICA Y SOCIEDAD ABIERTA

Así, una democracia moderna es inseparable del pluralismo y de la neutralidad religiosa en que consiste la laicidad. Son los elementos necesarios que apuntan en los orígenes de la modernidad, que cristalizan en la Ilustración y que se consolidan en los dos últimos siglos.

En ambos casos estos rasgos identificadores de la democracia traen causa de su condición esencial de sociedad abierta. Este concepto lo introdujeron en la filosofía política primero Bergson en *Les deux sources de la morale et de la religion* en 1932, y después, Popper en *The Open Society and its enemies*, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial (1945).

La sociedad abierta que es la democracia pluralista y laica se opone a la sociedad cerrada, que a su vez trae causa de una ideología antimoderna, tradicionalista y nacionalista. En esta ideología se refugia todo el antiiluminismo de plurales orígenes, desde el eclesiástico y sus fundamentalismos hasta los tradicionalistas o los fascistas del Estado ético. La sociedad cerrada desembocaba con esos perfiles ideológicos en un organicismo que consideraba al grupo como la realidad suprema, o a una verdad incontrovertible como la que se debió imponer necesariamente para alcanzar la libertad.

Esta perspectiva de la sociedad cerrada es definida por Bergson como un tipo de agrupación humana "cuyos miembros están unidos por vínculos recíprocos, indiferentes al resto de los hombres, siempre dispuestos a atacar o a defender, situados en una actitud de combate". Para Popper, la sociedad cerrada se constituye, esencialmente, sobre una rigidez de comportamientos apoyados por una autoridad de carácter religioso. En todo caso, con diferencias sobre el valor de la intuición que Popper rechaza, para salir de la sociedad cerrada, ambos coinciden en que en la sociedad abierta se valora al hombre y a su dignidad, cada uno asume una responsabilidad personal y no se disuelve en el colectivo. Es la inteligencia usada libremente por cada uno, contra la superstición, el dogmatismo y la creencia en una verdad política única. Es, en definitiva, la vieja idea kantiana del hombre que no necesita andaderas la que identifica a la sociedad abierta. El nacionalismo radical, el fundamentalismo reli-

gioso o político del Estado ético son los signos de la sociedad cerrada y los enemigos de la democracia. En esta perspectiva adquieren todo su valor como fundamentos del sistema las ideas de pluralismo y de laicidad. Se puede afirmar que la sociedad democrática sólo puede ser plural y laica.

El pluralismo deriva de la propia condición humana y de la libertad de pensamiento, de conciencia, de cátedra, de la ciencia, de la investigación y de la creación artística. El pluralismo, una consecuencia del libre juego de la razón humana, no es obstáculo para la existencia de sociedades ordenadas y estables, siempre que sean sociedades tolerantes y donde se reconozca al otro, al ajeno, como un ser igualmente digno, libre y razonable, capaz de crear y de creer. La cooperación social y la amistad cívica sustituyen en las sociedades bien ordenadas, como son las democráticas, al enfrentamiento y a la dialéctica amigo-enemigo propio de las sociedades cerradas. El pluralismo es el único escenario posible de este modelo, lo que no significa que estas sociedades no incluyan concepciones filosóficas contrapuestas. Sólo es exigible que esas filosofías contrapuestas sean superponibles y no incompatibles. Deben ser, como dice Rawls, 'filosofías comprensivas razonables', es decir, que expresan una concepción del mundo que se distingue de otras por los valores que prima, que suponen una cierta estabilidad, que no desean usar el poder político para impedir la expresión del resto de las doctrinas, y finalmente, que aunque crean en su verdad, no desean imponerla, ni piensan que supone, además, la única moralidad política.

Este pluralismo es imposible cuando una concepción del bien o una filosofía comprensiva pretenden ser el núcleo de la razón pública, es decir, cuando intentan que su ética privada, su idea de la virtud, de la felicidad, del bien o de la salvación, es decir, su núcleo de verdad, se conviertan en la ética pública de la sociedad. La disolución de la ética privada en ética pública es propia de las filosofías totalitarias.

Íntimamente vinculada con la idea de pluralismo está la laicidad o la concepción laica del Estado, igualmente esencial para la democracia. En efecto, vincular laicidad con democracia es, desde otro punto de vista, reconocer la autonomía de la política y de la ética pública frente a las pretensiones de las iglesias de dar una legítima-

ción social al poder político, vinculándolo con su particular concepción de la verdad en relación con su idea del bien, de la virtud o de la salvación. En el ámbito católico es un reflejo del agustinismo político, que no acepta que exista una luz propia y autónoma del mundo profano, y que sostiene que toda la luz procede de Cristo a través de su Iglesia, no sólo en su ámbito propio, sino también en el de la sociedad política. En el fundamentalismo islámico, el control coránico extremo, administrado por sus clérigos, pone igualmente en entredicho la posibilidad de una democracia plena.

La laicidad no supone una acción de la democracia contraria al hecho religioso ni a las instituciones eclesiales, aunque ciertamente ha existido y quizás existe un laicismo agresivo enemigo del fenómeno religioso, sobre todo en el siglo XIX. Es verdad que es normalmente reacción frente al asfixiante clima clerical del Estado Iglesia, como llamaba Fernando de los Ríos al Estado unido en España a partir de los Reyes Católicos, donde la unidad política se acompañó desde el principio con la unidad de la fe, haciendo así imposible la democracia.

No se trata, para responder al hartazgo de intromisión eclesiástica, de volver a ese laicismo decimonónico, cargado también de un contenido teológico, aunque sea negativo. Se trata de defender la neutralidad del Estado, su carencia de opiniones religiosas, frente a una concepción teológica de la política, que pretende imponer el uniformismo frente al pluralismo y el confesionalismo frente a la laicidad. Dice Bobbio que normalmente esas políticas de la Iglesia institución introducen en la defensa de intereses el espíritu de intransigencia dogmática propio de los principios. Para él, las cuestiones políticas son más de intereses que de principios, mientras que estos teólogos de mala fe trafican con principios para en realidad defender intereses. Por eso dirá Bobbio, en *Tra due Repubbliche* que “la consecuencia del espíritu teológico transportado al ámbito político es la elevación de los intereses, pero la degradación de los principios”.

Pero, en nuestro ámbito cultural, la Iglesia católica, más modernizada, cumple, como Iglesia institución y en una línea más moderada aunque igualmente incompatible con una sociedad democrática, el mismo papel. No afecta esta tesis ni a la religión en general ni a los valores cristianos ni al mensaje evangélico, sino a una forma de administrar esas verdades como incompatibles con otras y como

de obligado cumplimiento para alcanzar la libertad. Esas premisas son difícilmente compatibles con la sociedad democrática y sus valores.

Por una parte, es difícil compaginar la falta de democracia interna en la Iglesia con una defensa externa de sus valores. Hay una cierta hipocresía, o una cierta esquizofrenia de servicio a dos señores incompatibles, cuando se defiende un sistema oligárquico y jerárquico para el gobierno de la Iglesia y se defiende con el entusiasmo de los neófitos la democracia política, aunque eso tampoco siempre. Esta defensa de la democracia es además reciente, y arranca de las primeras décadas del siglo XX. Véanse si no los años negros que van desde 1830, *Mirari Vos*, hasta 1880, *Libertas*, donde las encíclicas pontificias condenaban los “torpes deseos de libertad que quieren acabar con los sagrados derechos de los príncipes”, y calificaban a la libertad de conciencia de pestilente error, en una defensa a destiempo de las monarquías absolutas.

Pío X, en la encíclica *Vehementer Nos*, sobre la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia, de 11 de febrero de 1906, defenderá la jerarquía y la falta de democracia interna de la Iglesia:

“La escritura nos enseña, y la tradición de los padres lo confirma, que la Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo... En el seno de la cual hay jefes que tienen plenos y perfectos poderes para gobernar, para enseñar y para juzgar. De lo cual resulta que esta sociedad es desigual por esencia, es decir, es una sociedad que comprende dos categorías de personas: los pastores y el rebaño, los que ocupan un rango en los distintos grados de jerarquía y la multitud de los fieles. Y de tal modo son distintos entre sí, que sólo en el cuerpo de los pastores reside la autoridad y el derecho necesario para promover y dirigir a todos los miembros hacia el fin de la sociedad. En cuanto a la multitud, ella no tiene otro deber que el de dejarse conducir y, rebaño dócil, seguir a sus pastores...”.

Este texto, que en lo esencial sigue estando vigente, aunque se enmascare con palabras más suaves, se expresa con el lenguaje de la literatura política justificadora del poder absoluto, que viene de

Dios. Con esa filosofía se ejerce censura sobre escritos de religiosos, teólogos, filósofos, y también de creyentes laicos. Incluso se limitan derechos fundamentales, y se incapacita para trabajar como profesor de religión por razones que afectan a la intimidad y que son perfectamente lícitas en la sociedad civil.

Pero la dificultad mayor para que la Iglesia pueda integrarse en una sociedad democrática procede de esa consideración, extrapolada al ámbito político, de que es la detentadora y la administradora de la Verdad con mayúsculas, que es la verdad de Dios. Esa postura sería compatible en el ámbito de la ética privada, es decir, si se sostuviera que la verdad que hace libres es la que afecta al ámbito de la moralidad individual. Creer que el mensaje cristiano libera a los individuos y es el camino de la salvación, es perfectamente compatible con la sociedad democrática, que además debe en sus estructuras constitucionales favorecer que ese mensaje pueda ser transmitido, e incluso promover las condiciones y remover los obstáculos para alcanzar ese fin. Pero la Iglesia institución está presente en los ámbitos del poder político, incluso hasta Pío IX, el último soberano con poder político real, y hoy mantiene un poder político simbólico, el Estado Vaticano.

El traslado al ámbito político del principio “la verdad nos hará libres” supone la superioridad de la Iglesia respecto de conceptos democráticos como participación, representación, sufragio, soberanía. Ésta es la orientación hoy imperante impulsada desde Roma, que aparta la compatible con la democracia que se expresaba en el Concilio y antes en la encíclica *Pacem in Terris*, de Juan XXIII. A la conciencia individual como motor de la participación política del cristiano le sustituye la vieja idea del orden del universo creado por Dios. Así, se pretende que una concepción del bien sea el núcleo definidor de la ética pública. La ética privada invade y sustituye a la ética pública, lo que es incompatible con lo que Rawls llama una sociedad bien ordenada, es decir, una sociedad democrática.

Otra cosa es el talante democrático de muchos cristianos y la cooperación social que prestan, en muchos casos impagable. Eso demuestra que no es la religión la que es incompatible con la democracia, que incluso tiene muchas raíces evangélicas, sino unas instituciones jurídicas y económicas que pretenden ejercer en una sociedad plural y laica el monopolio de la verdad. En ese aspecto se



comprende bien el valor esencial que tiene el espíritu laico para la Democracia.

## IGLESIA Y EDUCACIÓN

En su periódico *L'Avenir*, el 7 de diciembre de 1830, escribía Lammenais un artículo con la estable intención, que fue siempre la suya, de potenciar el catolicismo. Se acababan de producir las tres jornadas de julio de 1830 que derribaron la monarquía borbónica de Carlos X. Entonces, ya había apostado decididamente por la libertad. Probablemente es una de las primeras tomas de posición desde un creyente católico de las tesis de Roger Williams o de Locke, que tanto influyeron en los padres fundadores de la democracia americana. Con Gregorio XVI, el Papa de la *Mirari vos*, no le fueron favorables los vientos que venían de la Iglesia-Institución.

Sin embargo, defendía tesis muy sensatas, que hoy parecen indiscutibles, generalizadas y signo indubitado del constitucionalismo democrático:

“Pedimos primero”, dirá, “la libertad de conciencia o la libertad de religión plena, universal, sin distinciones y sin privilegios y, por consiguiente, en lo que nos toca como católicos, la total separación entre la Iglesia y el Estado..., que el Estado y la Iglesia deben igualmente desear... Esta separación necesaria y sin la cual no existiría para los católicos ninguna libertad religiosa, implica por una parte la supresión del presupuesto eclesiástico, y lo hemos reconocido claramente; por otra parte, la independencia absoluta del clero en el orden espiritual; quedando todos los curas sometidos a las leyes del país, como los demás ciudadanos y en el mismo nivel...”.

Estas palabras le costaron entonces la excomunión y la condena más enérgica del Vaticano, y hoy nos encontramos que, al menos en España, muchos de los objetivos que propugnaba están tan lejos de cumplirse como lo estaban cuando Lammenais escribió.

Siempre me ha resultado sorprendente que la Iglesia-Institución tenga gran preocupación por las relaciones Iglesia y Estado, y no

por las relaciones Iglesia-personas o Iglesia-sociedad. Por el contrario, la sensibilidad de las personas religiosas, de los creyentes de base, de los miembros de la Iglesia pueblo de Dios, se orienta más a los problemas de evangelización, de vida religiosa, de realización terrenal y societaria de los valores evangélicos. Es seguro que a estos últimos los puntos de vista de Lammenais les resultan cercanos y sienten que su realización favorecería su religiosidad. Pero, la Iglesia-Institución, en su versión actual, no es la que representó el cardenal Tarancón; sigue mezclando lo público y lo privado, sigue pensando que su doctrina debe dirigir la vida social, porque es poseedora de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías, como dijo en un documento de 1986 sobre la Moral en la sociedad democrática. A los que defendemos tesis sensatas y templadas sobre el papel de la Iglesia en su relación con el Estado, en la línea de este texto de Lammenais de 1830, de hace casi ciento setenta y cinco años, se nos acusa de agnósticos sin remedio y se nos combate como enemigos.

La Iglesia católica quiere seguir con privilegios y con ventajas, y no se resigna a ser una institución libre como otras en una sociedad libre y pluralista. No entiende que la verdadera libertad de conciencia debe conducir a la separación entre la Iglesia y el Estado y al igual tratamiento de todas las Iglesias y todas las confesiones religiosas. Por eso la *Ley de Libertad Religiosa* no afecta a la Iglesia católica, sino sólo a las restantes confesiones; por eso arañó una mención expresa en el artículo 16-3 de la Constitución, para diferenciarse de las demás; por eso, en fin, regula su status jurídico en España con una norma de derecho internacional, un tratado del Estado español con la Santa Sede, lo cual es insostenible en el siglo XXI. Ni la estructura interna de la Iglesia es democrática, ni existe igualdad entre hombre y mujer, ni hay seguridad jurídica en las relaciones entre la jerarquía y los fieles. Tampoco es democrático un Estado como el Vaticano, que en su Constitución del año 2000 establece en su artículo 1º que el Papa detenta, como soberano único, la totalidad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Aun así, pretende dar lecciones de democracia al Estado y a los partidos españoles sin entender, como lo hace Lammenais, la profunda razón de la separación entre la Iglesia y el Estado. Parece que está por encima del derecho y del poder estatal. Como decía Gambetta en un

discurso en la Cámara de Diputados el 4 de mayo de 1877, refiriéndose a la Iglesia: "... son los únicos que tienen el privilegio de estar situados por encima de la ley, que violan sin ningún remordimiento, dando al mundo el espectáculo doloroso de un Estado tutelado y con su consentimiento...". Es penoso que en la España democrática y aconfesional altos dignatarios eclesiásticos se jacten de desconocer un derecho del Estado, el matrimonio y el divorcio, y que grandes ceremonias de Estado, como funerales o bodas, se coloquen bajo la ley de la Iglesia.

Su derecho a existir, a actuar, a predicar su doctrina, a su personalidad jurídica, al respeto de los poderes públicos y a organizarse autónomamente está protegido por la Constitución y la ley. También el derecho a la cooperación con los poderes públicos, que puede comprender ayudas de éstos para el desempeño de su función. No se trata de que se la quiera encerrar en las sacristías, como dicen a veces, sino de que sepan que actúan en el espacio público como uno más, sin privilegios ni ventajas, dentro del pluralismo democrático. Así, no pueden seguir manteniendo la tesis de que los pecados son o deben ser delito y de que todos los ciudadanos deben comportarse como creyentes, ni pueden tener derecho a dirigir, con ceremonias religiosas, actos públicos, o tener sus signos presentes en los lugares públicos o en edificios oficiales. Hay que reconocer que hay mucha inercia en los casos de bodas, bautizos, entierros, funerales, etc., y que tampoco se da un buen ejemplo desde los poderes públicos.

La enseñanza de la religión en las escuelas es un signo, uno de los más representativos, de esa actitud invasora y descalificadora de los valores aconfesionales y laicos. La Iglesia impone a unos profesores, que paga el Estado -incluyendo su Seguridad Social-, a los que puede despedir a su antojo invocando muchas veces comportamientos, para ellos reprobables, que son ejercicio de derechos fundamentales en la Constitución Española. En cuanto a sus contenidos, dan una dimensión de materia fundamental a un adoctrinamiento catequístico, que se pretende imponer a toda costa, es un exceso y una desmesura que fuerza las cosas e introduce tensión en la sociedad y en el sistema educativo. No se pueden identificar en la enseñanza las creencias y los conocimientos. Victor Hugo, en un discurso de 15 de enero de 1850 contra la *Ley Falloux*,

se referirá a esta Iglesia-Institución como el partido clerical: "Impide a la ciencia y al genio ir más allá del misal y quiere enclaustrar el pensamiento en el dogma. Todos los pasos que ha hecho la inteligencia de Europa los ha hecho a su pesar. Su historia está escrita en el reverso de la historia del progreso humano. Se ha opuesto a todo... ¿Queréis ser los maestros de la enseñanza? No hay un poeta, un escritor, un filósofo, un pensador que acepten. Y todo lo que ha sido escrito, descubierto, soñado, deducido, ilusionado, enajenado, inventado por los genios, el tesoro de la civilización, la herencia común de las inteligencias lo rechazan..."

En el fondo, lo que suele ocurrir es que los representantes de la Iglesia-Institución carecen de respeto por el sistema jurídico español que regula la Constitución. La ignoran, como si no fuera con ellos, como si estuvieran al margen y por encima. Esto sucede cuando el cardenal de Madrid sigue sosteniendo que el Rey es Su Majestad católica, cuando se ignora un derecho del Estado como el que regula los contratos de trabajo y los derechos de la persona, o cuando se pide en un documento eclesiástico reciente que abogados y jueces católicos no intervengan en procesos de divorcio. Aquí, al exceso y a la arrogancia se añade la hipocresía, porque hay casos en los cuales hacen excepciones.

Sólo la Iglesia es libre cuando está desligada del Estado, cuando tiene un estatuto de libertad, como el que le dio la Constitución Española. Empeñarse en mantener el viejo estilo, la vieja mentalidad, la del anatema, la del juridicismo, la de la represión, con los ojos cerrados ante los nuevos tiempos, ni conduce a nada ni va a ayudar a resolver el problema. ¿Cuándo van a saber estar y a aprender las lecciones de la historia? Tendrán que superar su autoproclamada inocencia en la provocación de los escándalos y reconocer sus errores.

Sé que este planteamiento es una ingenuidad y que la Iglesia-Institución no va a ser capaz de abrir un proceso de reflexión sobre su situación en el mundo actual. Al contrario, seguirá descalificando y marcando despectivamente su superioridad. El único consuelo es que los signos de los tiempos no van por ahí y que cada vez más creyentes católicos están entendiendo este mensaje.